

Prof. Dr. Jürgen B. Donges- Universidad de Colonia

"La Economía de Mercado, ¿En crisis por Covid-19?"

La respuesta a la gran crisis originada por la pandemia implica, en primer lugar, a su dimensión en magnitudes desconocidas hasta ahora. Pero la respuesta sanitaria se ha encauzado desde la perspectiva científica y farmacéutica en magnitudes totalmente desconocidas hasta. Sin embargo, la repuesta al impacto socio-económico, sociólogo y político flaquea seriamente en cuanto al Orden Económico-Social que puede dar la respuesta adecuada: la economía del mercado como la gran fuerza societaria que puede lograr, una vez impulsada la dimensión sanitaria, la organización del propio sistema económico-social como los fundamentos del éxito del gran esfuerzo societario para lograr el desarrollo de las personas y la articulación de la sociedad. Lo que se refleja de forma muy precisa en todo este proceso de reconstrucción societaria eliminando incertidumbres en el contexto de la propia economía y en la sociedad.

I. Sobre la desafección a la economía de mercado

La actual pandemia del coronavirus está poniendo en cuestión en nuestros países el sistema de economía de mercado - basado en la iniciativa individual, la libre empresa, el derecho de propiedad privada de los bienes, la libertad de contratación y la de elección de empleo, el libre movimiento de las personas y los capitales, así como en la competencia efectiva en los mercados nacionales e internacionales. El accionismo monetario y fiscal para paliar en la medida de lo posible el efecto devastador de la pandemia sobre la economía no ha hecho más que enraizar en la sociedad la creencia en el omniscio 'papá Estado'. Sorprende cómo los ciudadanos en su mayoría aceptan la notable restricción de sus derechos democráticos fundamentales, que los Gobiernos vienen imponiendo, sin apenas control parlamentario, con sus regulaciones sanitarias y la fuerte intromisión en la economía. Las reiterativas algaradas callejeras en grandes urbes europeas de los negacionistas de la epidemia, mezclados con radicales antisistema de la derecha y la izquierda, no despliegan más que efectos mediáticos. En términos de análisis político-económico estamos ante una situación en la que la disposición de los ciudadanos de pagar un precio nada desdeñable por el control estatal de la pandemia es elevada.

Se repite un fenómeno bien documentado en estudios históricos y que revelan las encuestas de la prestigiosa Agencia estadounidense de Comunicaciones Edelman recogidas en su 'Trust Barometer' anual: en períodos de crisis económica prima entre los ciudadanos la desafección a la economía de mercado (y el sistema capitalista que la sustenta globalmente), en contra de los períodos de bonanza económica en los que las críticas apenas trascienden. Así fue en la Gran Depresión de 1929-32, en la crisis del petróleo desencadenada por la OPEP en 1973 y 1979/80 y en la Gran Recesión de 2009-12.

Los 'males' que aquejan a la sociedad en forma de paro laboral, pobreza, elevados alquileres de vivienda, desahucios, desigualdad en la distribución personal y regional de la renta y en las oportunidades educativas, los daños medioambientales incluido el cambio climático, cierta inestabilidad financiera etc. son atribuidos al sistema de

libertades económicas. Aparentemente no importa que estos problemas ya existían antes de la pandemia y que constituyen un reto permanente para los Gobiernos, al que unos responden mejor que otros cuando configuran y actualizan los múltiples instrumentos del Estado del Bienestar y regulan actividades que despliegan efectos indeseados. Desde determinados círculos intelectuales, sindicales y políticos se pronuncian los eslóganes anti-mercado convenientes desde su punto de vista para que calen en la opinión pública y releguen a un segundo plano los extraordinarios niveles de prosperidad de los que disfrutamos en los países avanzados gracias a la economía de mercado y el capitalismo. Incluso el Papa Francisco, en su reciente encíclica 'Fratelli tutti' (del 3 de octubre), articula una vez más su profundo escepticismo sobre la economía de mercado, olvidándose del declive económico y social al que ha conducido el peronismo como superexperimento estatal a su patria, Argentina. Advertir, como él hace, que 'el mercado no soluciona todos los problemas' es un despropósito, porque esto no lo ha afirmado jamás ni el más convencido capitalista y porque la teoría económica analiza detalladamente los llamados 'fallos de mercado' en forma de externalidades negativas, asimetrías de información entre los agentes económicos, monopolios naturales y bienes públicos puros de carácter no rival y no excluyente en el consumo. Como en estas situaciones el mecanismo de precios relativos no es capaz de ofrecer una información precisa sobre los beneficios y costes sociales de la actividad correspondiente y de asignar los recursos disponibles de forma eficiente, es necesaria la regulación estatal, como de hecho se practica.

II. De lo que se trata es crecer a medio plazo

Uno de los eslóganes populares es que los *shocks* adversos de oferta y demanda que la pandemia ha causado eximen a los Gobiernos de países en apuros de toda responsabilidad por el desplome económico sufrido y que les legitima a recibir recursos financieros externos, con un mínimo de condicionalidad, por ejemplo a través del Fondo europeo de Recuperación (dotado con 750.000 millones de euros).

El argumento tiene sus pro y contra. Ni que decir tiene, que los Gobiernos no son 'culpables' de la grave embestida causada por la pandemia. Ahora bien, no es casualidad que las consecuencias económicas adversas de la pandemia sean mucho más acentuadas

en unos Estados miembros de la UE que en otros (habida cuenta de las diferencias en la intensidad de la epidemia). Los países más golpeados habían registrado ya antes de irrumpir el coronavirus unas debilidades estructurales fundamentales en la economía, como son (i) un tejido productivo fragmentado y anquilosado, (ii) una baja productividad total de los factores, (iii) la persistencia de unas elevadas tasas de paro laboral y sobre todo juvenil, (iv) un sistema educativo (escolar y universitario) anticuado e inapropiado, (v) un excesivo gasto público estructural, (vi) una Administración Pública ineficiente, (vii) unas instituciones básicas del Estado un tanto endebladas, demasiado politizadas y poco respetadas por gobernantes narcisistas (¿Estado fallido?), lo cual empeora el entorno de confianza para las empresas y daña la reputación exterior del país.

De estas debilidades sí que son responsables los (sucesivos) Gobiernos nacionales al no haber aplicado políticas adecuadas para subsanar estos problemas de fondo con la contundencia requerida e infundir así la requerida confianza de las empresas y los inversores extranjeros en un futuro prometedor. Esto son ‘fallos del Estado’ que en la teoría económica también tienen su sitio y que la pandemia ha dejado al descubierto. En Europa, Italia es el ejemplo más llamativo. España no se libra de este fatal diagnóstico. No en vano, el BCE ha insistido reiterativamente en la inexorabilidad de las reformas estructurales, sin que los Gobiernos afectados (no señalados explícitamente por cortesía diplomática) se dieran por aludidos. Tampoco en España, donde la agenda del actual Gobierno de Sánchez contempla la derogación de la importante reforma laboral de 2012, de manos del Gobierno de Rajoy, a pesar de los buenos resultados que ha dado para la creación de empleo. Querer echar marcha atrás es lo más absurdo que se le pueda ocurrir a un Gobierno que se considere responsable del bienestar de la sociedad; de progresista, nada, de retrógrada, todo.

Los defectos estructurales que lastran la economía de diversos países, entre ellos la española, no se disiparán con dinero, ya sea nacional o europeo. Las ayudas públicas para satisfacer necesidades empresariales de liquidez y financiación a corto plazo pueden, como ha sucedido, amortiguar el impacto económico y social adverso del Covid-19 y poner en marcha la recuperación de la actividad. Pero para que esta recuperación sea sostenible en el tiempo son necesarios todos los ingredientes de la economía de mercado que en su conjunto impulsan la flexibilidad en la adaptación y ajuste de las empresas y los trabajadores a circunstancias cambiantes exigentes y potencian la capacidad de innovación tecnológica que en los tiempos que corren va muy vinculada a la digitalización con sus nuevas formas de producir, trabajar y consumir y a la transición ecológica con la descarbonización del sistema energético y la producción de energías renovables.

El Estado no es el actor más adecuado para que la economía sea eficiente, dinámica, inclusiva y resiliente y pueda aguantar fuertes *shocks* adversos, como quieren hacernos creer unos dirigentes políticos de la izquierda radical en línea con su ideario ideológico que contempla un mayor peso de ‘lo público’ en el sistema económico. Todo lo contrario. Ningún funcionario, por inteligente y aplicado que sea, está con la sabiduría de predecir y calibrar futuras evoluciones económicas y tecnológicas (*ceterum censeo* hayekiano). Los sistemas de planificación centralizada de la economía en la extinta Unión Soviética y sus países satélites (incluida la RDA) así como hoy todavía en Cuba y Corea del Norte son ilustrativos del tremendo fracaso colectivo de estos ordenamientos en términos de un crecimiento económico bajo, un paro encubierto elevado y unos niveles de vida de la población míseros (aparte de vulnerar sistemáticamente los derechos humanos de los ciudadanos). En áreas muy especializadas, como la industria del armamento o la astronáutica y espacial, los planificadores pueden conseguir logros espectaculares, como en la Unión Soviética y Corea del Norte. Pero es improbable que armas atómicas, cohetes y satélites sean bienes prioritariamente demandados por los hogares. China se libra de este veredicto por manejar, tras el desastre de la época de Mao Tse Tung, un sistema de ‘capitalismo estatal’ en el que pueden desplegarse y hacer buenos negocios empresas privadas bajo el paraguas político de la dictadura del Partido Comunista Chino. El espectacular proceso de desarrollo económico en China en las últimas décadas pone de relieve todo lo que se puede conseguir mediante fórmulas capitalistas (por incompletas que aún sean).

III. Lo primero: afianzar la recuperación económica

Para el desplome escalofriante de la actividad económica en el primer semestre de este año el sistema de economía de mercado no es el causante último. Fueron más bien las medidas sanitarias, adoptadas por necesidad para proteger la salud de la población, las que frenaron la producción, fragmentaron las cadenas de valor globales, erosionaron la división internacional del trabajo, y recortaron la demanda de consumo, el turismo y el ocio en sus diversas especialidades. Con la desescalada de dichas medidas y la paulatina reapertura de las economías a mediados de año empezó levemente la recuperación – con economía de mercado como marco de ordenación, para entendernos.

La recuperación proyectada hace unas semanas por los principales organismos internacionales e instituciones nacionales de previsión económica marcaba diferentes velocidades e intensidades heterogéneas entre países y sectores.

- El crecimiento global podría situarse en torno al 5%, con el comercio mundial volviendo modestamente a la senda de la expansión, gracias también a que las cadenas de valor empiezan a recomponerse. Las inversiones directas extranjeras repuntarían.
- A la cabeza marcharía en este escenario China por encima de la media global. El país mostraría un patrón tipo ‘V’, es decir, que recuperaría pronto los niveles de actividad previos a la pandemia.

- A China le seguirían entre los grandes países, con ritmos algo inferiores a la media global, Estados Unidos, Alemania y Francia. En estos países, a diferencia de China, los datos epidemiológicos no mejoran como sería deseable. La coyuntura mostraría un perfil tipo 'V' asimétrica, es decir, la recuperación sería más lenta que la previa contracción y tardaría más en compensar las pérdidas de producción en el primer semestre de 2020, posiblemente hasta finales de 2021.
- En el furgón de cola irían los países con gran peso del sector terciario, concretamente el turismo, donde más repercuten las medidas sanitarias de reducir el contacto social para evitar contagios. Para España se prevé un crecimiento del 6-7%. Parece mucho, pero no lo es realmente porque la tasa está calculada en base a un nivel de producción históricamente muy bajo. La economía española no volvería a los niveles de PIB pre-Covid hasta por lo menos en 2023. La recuperación además mostraría un perfil de tipo 'W', es decir, en la parte alta de la letra con unos sectores como el de la industria manufacturera y actividades digitalizadas avanzando a ritmo moderado y en la parte baja otros sectores quedando rezagados como el turismo y muchas actividades culturales y de ocio. La previsión incluye un esperado impacto de los multimillonarios fondos procedentes de la UE (en 2021 al menos 27.000 millones de euros de un total de los 140.000 millones de euros otorgados en forma de transferencias no reembolsables y préstamos para los próximos seis años). El supuesto es que los recursos lleguen a tiempo (principios de 2021) y se destinen a proyectos de inversión de futuro, sólidos y generadores de PIB y empleo, lo cual no está garantizado. Si el Gobierno español no presenta con credibilidad de ejecución tales proyectos, no debería de recibir de Europa ayuda financiera alguna, porque ésta caería en saco roto; se utilizaría para tapar agujeros presupuestarios y financiar políticas sociales sin contribución alguna a fortalecer la competitividad de las compañías industriales y de servicios en el contexto europeo y mundial y a elevar el crecimiento potencial a medio plazo.

La reactivación que realmente se produzca estará respaldada por las políticas macroeconómicas. Por un lado, los principales Bancos Centrales mantendrán su rumbo extremadamente acomodaticio; el BCE incluso acaba de intensificarlo por pensar que la economía lo necesita. Por otro lado, los Gobiernos seguirán utilizando discrecionalmente diversas herramientas de la política fiscal para estimular la actividad, aparte del impulso que despliegan los 'estabilizadores automáticos' de los Presupuestos del Estado. Destaca Estados Unidos como el país en el que las medidas monetarias y fiscales de apoyo a la economía son de mayor envergadura entre los países avanzados. A España le corresponde el mérito dudoso de transmitir a los mercados mensajes desconcertantes: el actual Gobierno implantará con

los Presupuestos Generales del Estado de 2021, en plena crisis pandémica y económica (*sic*), subidas de impuestos para grandes compañías y rentas de trabajo y de capital altas, además de incrementar algunos impuestos indirectos y de introducir la tasa Tobin (transacciones financieras) y la tasa Google (servicios digitales), sin reparar en el efecto disuasorio que estas medidas pueden tener sobre las inversiones empresariales (con independencia del probablemente escaso impacto recaudatorio)..

La proyección de una reactivación económica no puede ser más que incierta. Las cosas pueden ir de mal a peor en todos los países y enfriar la recuperación económica, si perdura la actual segunda ola de infecciones y contagios, lo cual obliga a endurecer las restricciones a la actividad, y si se atrasa demasiado la disponibilidad de vacunas efectivas contra la COVID-19 (habida cuenta de los esperanzadores ensayos clínicos de diversas compañías farmacéuticas). La confianza de los agentes económicos caería notablemente, la incipiente reactivación no se afianzaría, y tardaría años hasta que las economías recobren el nivel prepandemia (el FMI teme que hasta, al menos, 2026). El perfil de reactivación tendría la forma de 'W' o, peor todavía, de 'L'.

IV. Mercados abiertos, una *conditio sine qua non*

Si se cumplirán o no las previsiones cautelosamente optimistas dependerán en gran medida del buen funcionamiento de la economía de mercado. Son irrenunciables (i) la globalización de la actividad económica como correa de transmisión del conocimiento y propulsora de economías de escala, (ii) la especialización en la producción de bienes y servicios con arreglo a las ventajas comparativas de cada país, y (iii) en el sector empresarial unas cadenas de valor eficientes con materias primas, componentes, piezas y productos intermedios para ser elaborados en otros países, repartidas multilateralmente y no solo con China como epicentro.

Es decir, urge un elevado grado de apertura de las economías y el libre comercio junto con la libre movilidad internacional de los capitales (inversiones directas) y de las personas (trabajadores, viajeros de negocios, estudiantes, turistas). Dos requerimientos al respecto:

- Uno, hay que contener el proteccionismo arancelario y no arancelario que tanto le gusta al aún presidente Trump. Queda por ver si bajo el próximo presidente estadounidense, Joe Biden, la política comercial será menos proteccionista y más de libre comercio, a pesar de los enfoques intervencionistas y de control que tradicionalmente prefiere el Partido Demócrata, concretamente su ala izquierda (Bernie Sanders). Tampoco son buenos augurios que el propio Biden no es un convencido anti-proteccionista.
- Dos, en cuanto al tránsito de las personas será inevitable intensificar los controles sanitarios fronterizos (hecha la

reciente experiencia con la transmisión de los contagios con el coronavirus). Pero esto debería hacerse de forma transparente, coordinada entre los países y en términos claros para los agentes económicos con el fin de evitar distorsiones y limitar lo menos posible los intercambios comerciales.

Como los *shocks* de oferta de la pandemia del coronavirus provocaron en los países avanzados notables escaseces de productos sensibles – no solo sanitarios, aunque también –, cunde ahora la idea de la necesidad de recuperar el control nacional (o regional/europeo) sobre las cadenas de valor globales y reducir con ello ‘dependencias excesivas’ de China y otros países. Desde las esferas gubernamentales francesas y alemanas, por ejemplo, se viene promulgando el objetivo de repatriar en sectores considerados de relevancia estratégica – incluida la sanidad – las actividades que en el pasado habían sido deslocalizadas al extranjero para ahorrar en costes laborales, fiscales y regulatorios (*‘reshoring’* como correctivo del antiguo *‘offshoring’*). De paso se pretende legislar las cadenas de valor exigiendo de nuestras empresas que importan bienes intermedios la garantía de que en los países de origen (emergentes y de desarrollo) se respeten unas condiciones dignas de trabajo. Se trata de una forma sutil de proteccionismo, habida cuenta del hecho que en las economías emergentes y en desarrollo de Estados soberanos se trata que no tienen por qué compartir posturas de los países avanzados sobre la regulación del mercado de trabajo.

La desconfianza de numerosos políticos, sobre todo los de talante populista y vacíos de conocimientos económicos, hacia las fuerzas del mercado activa en ellos una tentación intervencionista que les impide valorar adecuadamente las consecuencias negativas de su actuación, como son la fragmentación de mercados y el aplanamiento de la curva de aprendizaje, lo cual mantiene innecesariamente elevados los costes de producción y de innovaciones tecnológicas. Tampoco parece preocupar demasiado que esta política de repatriación de actividades y de exigencias regulatorias discrimina a los países emergentes y en desarrollo que se han integrado, o pretenden hacerlo, en el sistema de la división internacional de trabajo: la exclusión de estos países de las cadenas de valor globales significa que recibirían menos inversiones extranjeras, menos capital humano y menos conocimiento, lo cual frenaría su industrialización y ralentizaría su crecimiento económico. ¿Qué justificación quedaría para las políticas oficiales de ayuda al desarrollo? Una prueba más de que ampliar ‘lo público’ en la economía no trae beneficios reales para nadie.

En la economía de mercado no se producen tales contradicciones. Es asunto exclusivo de las empresas privadas decidir el modelo de producción internacionalmente diversificado que consideren operativo y rentable. Tal vez

reconsideren en vista de la experiencia reciente las cadenas de valor establecidas, cambien su estructura geográfica y ajusten los eslabones, y reduzcan la dependencia de proveedores extranjeros y recurran más a proveedores locales. Pero no por eso aumentaría automáticamente la seguridad y fiabilidad del suministro de los *inputs* requeridos. Habría que complementarlo operando con un mayor almacenamiento, lo cual acarrea unos costes nada desdeñables. Sea como fuere, lo importante es no echar a perder los grandes efectos benéficos que genera la división internacional del trabajo en el mercado libre, todos ellos perfectamente avalados por la evidencia empírica y que sobrevivirán el coronavirus.

V. Tentaciones de más deuda pública permanente, un error

Un tema actualmente muy controvertido en el mundo académico y que ya trasciende al sector político es si para encarrilar trayectorias de crecimiento fuertes y constantes en el tiempo habría que ampliar de forma permanente el endeudamiento del Estado. La cuestión no es que la pandemia esté pasando factura a las cuentas públicas, disparando los déficits y el endeudamiento de las Administraciones Públicas hasta máximos históricos; tomar medidas fiscales expansivas durante la crisis era inevitable y tenía su justificación. La expectativa, en principio, es que la recuperación económica post-pandemia ayudará a generar en los presupuestos del Estado superávits primarios adecuados que vayan reduciendo paulatinamente los niveles de deuda pública acumulados durante la crisis sanitaria.

La cuestión de fondo que preocupa a prestigiosos economistas y analistas es otra: la posibilidad de que la economía de mercado sufre de forma secular una acumulación excesiva de oferta de capital, debido a que con los elevados niveles de vida alcanzados y el envejecimiento de la población las personas tienden a aumentar de forma permanente la propensión al ahorro, mientras que la demanda de capital por parte de las empresas (inversión privada) se mantiene a lo largo del tiempo casi constante en la medida que el progreso tecnológico compensa la disminución de la productividad marginal del capital. El ahorro ‘forzoso’ de los hogares que ha aumentado este año notablemente en muchos países (también en España) como consecuencia de la pandemia (restricciones sanitarias impuestas a las compras de bienes y servicios de consumo) así como el acusado incremento del ahorro ‘precaución’ de las familias (ante una situación excepcional de riesgo de paro laboral) amplían la brecha entre oferta y demanda de capital. Para cerrarla se requiere, según este diagnóstico, un aumento permanente de la deuda pública que impulse directamente la demanda de capital (inversión pública) y recorte el ahorro estimulando el consumo privado. Para ello habría que eliminar en los países avanzados la norma constitucional (en España el artículo 135 de la Constitución) que limita el uso del déficit público estructural y del endeudamiento estatal como instrumento de política económica.

Socialistas y sindicatos, tradicionalmente proclives a políticas fiscales expansivas y a un mayor tamaño del Estado en la

economía, percibirán con agrado este mensaje. Pero por claro que aparezca el mensaje a primera vista no es convincente desde el punto de vista de la eficiencia económica (estática y dinámica). Una cosa es configurar un modelo teórico en el que la oferta y la demanda de capital incluida la deuda pública están en equilibrio con un tipo de interés real positivo y con pleno empleo. Otra cosa muy distinta es evaluar las implicaciones en la realidad.

Los factores imponderables son numerosos, destacando tres:

- Uno, no hay un mecanismo eficaz que canalice la deuda pública hacia un gasto eficiente, es decir, financie inversiones públicas productivas y evite un 'efecto expulsión' (*crowding out*) de inversiones empresariales.
- Dos, no hay garantía alguna que el tipo de interés real se mantenga eternamente por debajo de la tasa de crecimiento de la economía, como es actualmente el caso e independientemente de si está o no sesgado a la baja por la política monetaria ultraexpansiva de los principales Bancos Centrales. La condición $i < g$ tiene que darse permanentemente para que el mayor endeudamiento público sea sostenible en el tiempo y el Estado no corra el riesgo de verse sometido a ataques especulativos por parte de los agentes financieros.
- Tres, el envejecimiento poblacional en los países avanzados irá produciendo el desahorro de las familias a medio plazo.

Por consiguiente, es conveniente priorizar en la estrategia de política fiscal el principio de la estabilidad presupuestaria a medio y largo plazo, como no puede ser de otra manera en un sistema de economía de mercado. Las normas constitucionales al respecto son buenas y deben mantenerse porque (i) promueven la disciplina presupuestaria con estricto rigor y eficiencia en el gasto público, (ii) incentivan a los inversores internacionales a comprar la deuda soberana emitida, y (iii) protegen a futuras generaciones de heredar hipotecas de deuda pública que reducen el margen fiscal del Gobierno de turno para aplicar políticas contracíclicas y de desarrollo y que pueden obligar a las autoridades a aumentar los impuestos con efectos adversos sobre el crecimiento económico.

VI. Conclusiones

Y termino. Lo que los agentes económicos ahora más necesitan es certidumbre cara al futuro. No la pueden recibir

en cuanto a la evolución de la pandemia se refiere, porque aquí todo depende de cuándo habrá una vacuna eficaz. Pero certidumbre sí la pueden y deben obtener con respecto a unas políticas económicas que movilicen la iniciativa privada. El modelo adecuado es el sistema de la economía de mercado - ningún otro, y desde luego no uno con una presencia excesiva del Estado como actor en el quehacer económico. La demonización de la libertad económica y la empresa privada con ánimo de lucro no es más que contraproducente y no ayuda a nadie, a los que menos los que buscan empleo. Y sin la libertad empresarial en un marco de competencia no estaríamos asistiendo a la carrera investigadora con la que innumerables compañías farmacéuticas en todo el mundo buscan vacunas eficaces contra el coronavirus.

La economía de mercado ha estado sometida a lo largo de la historia más de una vez a un test de estrés exigente que los enemigos de la libertad trataron de aprovechar políticamente en interés propio. Siempre ha pasado con creces la prueba, poniendo de manifiesto su enorme capacidad de adaptación a las circunstancias reinantes y de evolución continua y mostrando con todos los cambios acaecidos su gran fuerza para fomentar la prosperidad y la libertad en la sociedad. Y así será en la crisis pandémica actual y más allá de la misma.

Prof. Dr. Jürgen B. Donges



Es Catedrático Emérito de Ciencias Económicas de la Universidad de Colonia (Alemania) y Senior Fellow del Cologne Institute for Economic Policy. Desde 1969 hasta 1989 ha trabajado como investigador económico en el Kiel Institute for the World Economy, donde dirigió diversos departamentos y del que fue vicepresidente durante los últimos seis años. Ha sido Presidente del Consejo alemán de Expertos Económicos y de la Comisión gubernamental para la Desregulación de la Economía. Ostenta cargos de asesor económico en diferentes instituciones académicas alemanas, españolas y de otros países. Ha sido miembro del Consejo de Vigilancia de diferentes empresas. Tiene una amplia lista de publicaciones científicas sobre la economía alemana, española e internacional con análisis extensos de las políticas macro y microeconómicas